



Santiago de Cali, uno (1) de septiembre de dos mil veinte (2.020)

Auto Interlocutorio No. 322

RADICACION	76001-23-33-000-2019-01090-00
MEDIO DE CONTROL	ELECTORAL
DEMANDANTE	HECTOR FABIO GARCIA GARCIA
DEMANDADO	LUIS FERNANDO GIRALDO RODRIGUEZ ERIDIS ESTER POLO MANOSALBA
MAGISTRADO PONENTE	VÍCTOR ADOLFO HERNANDEZ DIAZ.
TEMA	APLICACIÓN DECRETO LEGISLATIVO 806 DE 2020 – RESUELVE EXCEPCIONES PREVIAS

I. ASUNTO

Ingresa el proceso al Despacho para señalar fecha para audiencia inicial.

Mediante el Acuerdo No. PCSJA20-11517 de 16 de marzo de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso suspender los términos procesales en los juzgados, tribunales y Altas Cortes entre el 16 y 20 de marzo de 2020. Esta medida fue prorrogada mediante los Acuerdos No. PCSJA20-11521 de 19 de marzo, PCSJA20-11526 de 22 de marzo, PCSJA20-11532 de 11 de abril, PCSJA20-11546 de 25 de abril, PCSJA20-11549 de 7 de mayo, PCSJA20-11556 de 22 de mayo y PCSJA20-11581 de 27 de junio de 2020

En desarrollo del Decreto 637 de 6 de mayo de 2020<sup>1</sup> y durante la suspensión de términos antes referida, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo No. 806 de 4 de junio de 2020 *“Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”*, en el cual se regularon distintas etapas de los procesos judiciales. Concretamente, frente a las excepciones, sin distinguir medios de control, se dispuso que se formularían y decidirían según lo regulado en los artículos 100 a 102 del Código General del Proceso:

“Artículo 12. Resolución de excepciones en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. De las excepciones presentadas se correrá traslado por el término de tres (3) días en la forma regulada en el artículo 110 del Código General del Proceso, o el que lo sustituya. En este término, la parte

demandante podrá pronunciarse sobre ellas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en las excepciones previas.

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juzgador las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.

Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se tramitarán y decidirán en los términos señalados anteriormente.

**La providencia que resuelva las excepciones mencionadas deberá ser adoptada en primera instancia por el juez, subsección, sección o sala de conocimiento. Contra esta decisión procederá el recurso apelación, el cual será resuelto por la subsección, sección o sala del tribunal o Consejo de Estado. Cuando esta decisión se profiera en única instancia por los tribunales y Consejo de Estado se decidirá por el magistrado ponente y será suplicable.”** (Negrilla fuera de texto)

La norma acabada de reseñar no contempló excepción alguna, es decir, se refirió a todos los procesos que se adelanten ante esta jurisdicción, en consecuencia, resulta aplicable también al trámite del proceso electoral

Ahora, revisado el artículo 101 del CGP, se observa que dicha disposición determina la oportunidad y trámite de las excepciones previas, no obstante, el artículo 12 del Decreto 806 de 2020 hizo extensivo este mismo procedimiento para la resolución de las excepciones de - cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva- de acuerdo con lo señalado en el inciso tercero ibídem.

En ese orden de ideas, es necesario adecuar el proceso al tránsito normativo de aplicación inmediata, como sucede con el Decreto 806 de 2020 que rige a partir de su publicación - 4 de junio de 2020 - con vigencia de dos (2) años. Entonces, previo a la realización de la audiencia inicial, si fuera necesaria, ha de decidirse sobre las excepciones propuesta.

Igualmente dispone el referido decreto que, la providencia que resuelva las excepciones mencionadas deberá ser adoptada en primera instancia por el juez, subsección, sección o sala de conocimiento. Contra esta decisión procederá el recurso apelación, el cual será resuelto por la subsección, sección o sala del tribunal o Consejo de Estado. Cuando esta decisión se profiera en única instancia por los tribunales y Consejo de Estado se decidirá por el magistrado ponente y será suplicable.

## II. DECISION DE EXCEPCIONES

2.1. Dentro del término para contestar la demanda, Los demandados **Iridis Ester Polo Manosalba y Luis Fernando Giraldo Rodríguez** propone la excepción de inepta demanda, indicando que el libelo adolece de hechos determinados y del concepto de violación. No se determina el candidato in curso en doble militancia, realizándose acusación general a 7 candidatos. Sobre las pruebas aduce que las aportadas no indican a cuál de los candidatos se hace referencia; así mismo, las fotos no muestran la fecha de su emisión, como tampoco señala lo que se pretende probar con ellas.

2.2. El **Consejo Nacional Electoral** formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, argumentando que el proceso versa sobre una causal subjetiva, esto es, aquella referente a los requisitos, calidades y condiciones de elegibilidad de los candidatos, además, no se presentó solicitud alguna de revocatoria de la inscripción por la causal de prohibición doble militancia, por lo tanto, el Consejo no ha hecho pronunciamiento alguno.

### 2.1. Trámite de las excepciones planteadas.

En este punto, se pone de presente que de las excepciones propuestas se corrió traslado de conformidad con lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 175 del C.P.A.C.A. La parte demandante se pronunció en esta oportunidad precisando que la demanda fue subsanada, cumpliendo con los requisitos legales establecidos en la ley 1437 de 2011<sup>1</sup>.

## II. CONSIDERACIONES

3.1. Excepción denominada “falta de legitimación en la causa por Pasiva”, propuesta por el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL.

Sobre el particular, el Consejo de Estado<sup>2</sup> ha señalado que la legitimación en la causa es la posibilidad de que la persona formule o controvierta las pretensiones de la demanda, por ser el sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial debatida en el proceso.

Dicha Corporación ha precisado además que existen dos tipos de legitimación en la causa: la legitimación de hecho y la legitimación material. La primera ha sido definida como “una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, por manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto

<sup>1</sup> Fls.177-185.

<sup>2</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera Sentencia 24 de octubre de 2013, C.P. Enrique Gil Botero. Radicación 680012315000199511195(25869).

admisorio de la demanda”, y la segunda, como “la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas”<sup>3</sup>

Bajo ese entendido, ha concluido el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo que la legitimación en la causa material no es constitutiva de excepción de fondo, sino un presupuesto necesario para proferir sentencia de mérito favorable, ya sea para el demandante o para el demandado, y que, en consecuencia, la misma no impide al fallador pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda, toda vez que “...la aludida legitimación constituye un elemento de la pretensión y no de la acción, en la medida en que se trata de una condición propia del derecho sustancial y no una condición procesal, que, cuando no se dirige correctamente contra el demandado, constituye razón suficiente para decidir el proceso adversamente a los intereses del demandante, por no encontrarse demostrada la imputación del daño a la parte demandada”<sup>4</sup>

Ahora bien, revisada la demanda y los documentos acompañados se observa que, lo pretendido por la parte actora es la nulidad del acta de escrutinio general contenida en el Formulario E-26CON y en consecuencia se ordene la cancelación de la credencial conferida al señor Luis Fernando Giraldo Rodríguez y la señora Eridis Ester Polo Mosquera como Concejales electos del Municipio de Cartago, Valle.

De acuerdo con los lineamientos expuestos, y tomando en consideración la definición que jurisprudencialmente se le ha dado a la legitimación de hecho, para el Despacho es claro que, en este momento procesal, la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL no tiene vocación de prosperidad, si en cuenta se tiene que en el presente asunto se pretende la nulidad del acta de escrutinio general de votos.

Por lo tanto, el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL al ser el ente encargado de inspeccionar y vigilar el proceso y la organización electoral, en este caso, estaría legitimada formalmente o de hecho en la causa por pasiva, sin que ello implique que le asiste o no responsabilidad alguna en los hechos que se demanda.

Así las cosas, la presente excepción no se declarará probada.

### 3.2. Excepción de “inepta demanda” propuestas por los demandados.

<sup>3</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 3 de octubre de 2012, Consejero Ponente Dr. MAURICIO FAJARDO GÓMEZ, Radicación No. 25000232600019950093601 (22984).

<sup>4</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 4 de febrero de 2010, Consejero Ponente Dr. MAURICIO FAJARDO GÓMEZ, Radicación No. 70001233100019950507201 (17720).

Sobre esta causa ha indicado el Consejo de Estado<sup>5</sup>.

“Tratándose de actos electorales, las causales con base en las cuales se puede cuestionar la legalidad del acto se encuentran consagradas en los artículos 137 y 275 del CPACA. De la misma forma, el concepto de la violación será aquel que desarrolle la parte demandante con base en los elementos, que, a su juicio, evidencien que se configuró alguna de las causales antes anotadas.

Ahora bien, no se puede perder de vista que el medio de control contemplado en el artículo 139 del CPACA tiene naturaleza pública. Por consiguiente, es totalmente viable que un proceso electoral se inicie por una persona sin el más mínimo conocimiento jurídico; sin que por supuesto el carecer de formación jurídica se erija como un obstáculo para que cualquier persona pueda ejercer el control de legalidad del acto acusado, lo que sucede es que el análisis de la demanda requerirá por parte del juez de un examen sistemático e integral.

No de otra manera se explica que el CPACA haya dotado al juez, como Director del proceso, de amplias facultades de interpretación de la demanda, potestades que adoptan mayor fuerza e importancia tratándose del proceso electoral dada su naturaleza pública, la cual impone que, en ciertos eventos, la autoridad judicial realice un ejercicio hermenéutico de análisis sistemático y armónico de la demanda y su corrección, si es del caso, para entender a cabalidad las censuras presentadas.

**Debe resaltarse que este ejercicio de interpretación no comporta un detrimento para los derechos de la contraparte, pues no se trata de flexibilizar los requisitos de admisión de la demanda, sino de que la naturaleza pública de este medio de control tenga efecto útil. Por ello, siempre que el juez pueda identificar con toda certeza: i) el acto sometido a control y ii) los reproches que a él se endilgan, se entenderá que sí existe concepto de violación con independencia de lo desafortunada que pueda resultar la redacción o la metodología de la demanda.**

**En este contexto, si del examen de la demanda y su corrección se pueden extraer las razones que llevaron al demandante a ejercer su derecho de acción y las normas en la que sustenta su petición, la autoridad judicial puede, válidamente, concluir que sí existe un verdadero concepto de la violación, y, por ende, proseguir el proceso.**

Esta posición no es aislada, ya que la Sala ha concluido que para admitir una demanda de nulidad electoral, el requisito de que trata el numeral 4 del artículo 162 del CPACA debe analizarse teniendo en cuenta la naturaleza pública de la citada herramienta judicial, pues dado ese carácter es usual que los escritos introductorios no respondan a la técnica jurídica o el lenguaje especializado propio de los profesionales del derecho, sin que esa circunstancia pueda establecerse como un obstáculo para el acceso efectivo a la administración de justicia”. (resaltado fuera del texto)

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en la excepción propuesta, debe señalarse en primer lugar que el Despacho, mediante auto de fecha 2 de diciembre de 2019, de conformidad con el artículo 276 del CPACA, concedió a la parte actora un plazo de 3 días para que procediera a corregir la demanda frente a los hechos en que incurrieron los candidatos electos Lui Fernando Giraldo Rodríguez y Eridis Ester Polo Manosalba, que sustentan las pretensiones, así como las normas y el concepto de la violación, teniendo en cuenta que demandaba candidatos que no fueron elegidos.

---

<sup>5</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO, providencia del 28 de febrero de 2019, radicación número: 11001-03-28-000-2018-00602-00.



En virtud de lo anterior, la parte actora subsanó la demanda en los aspectos advertidos por el Despacho dentro del término legal concedido para ello, de acuerdo con la constancia secretarial visible a folio 115 del expediente, por lo que se procedió a su admisión.

En el escrito subsanatorio de la demanda se indicó que los demandados realizaron actividades proselitistas en favor de otros candidatos a la Acadia del Municipio de Cartago, Valle, cuando se encontraban inscritos por el partido Centro Democrático y era al candidato a la Alcaldía por ese partido a quien debían apoyar, así mismo, se indicó cuales fueron dichas actividades. En cuanto a las normas vulneradas y el concepto de la violación transcribió el inciso 2 del artículo 107 de la CP. y el artículo 2º de la ley 1475 de 2011.

Es preciso señalar que el concepto de la violación no está sometido a un modelo estricto de técnica jurídica, solo en ausencia total del mismo, se podrá entender que la demanda es defectuosa por carencia de dicho presupuesto, en este caso, se observa que las normas vulneradas hacen relación con la causal de la doble militancia y en los hechos de la demanda que sirven de fundamento a las pretensiones se expone porque se vulnera estas disposiciones.

En este contexto, es claro que de la lectura armónica de la demanda se infiere con claridad cuál es el reproche en el que la parte actora sustenta su escrito introductorio. por lo que conforme lo indica el Consejo de Estado, lo que interesa es que se “pueda identificar con toda certeza: i) el acto sometido a control y ii) los reproches que a él se endilgan”.

Sostiene igualmente los demandados, que las pruebas no demuestren la causal invocada, sin embargo, este será un análisis que corresponde al fondo del asunto, al igual que si prosperan o no las pretensiones, o que el concepto de la violación resulte acertado para enervar la presunción de legalidad del acto que se demanda, ello es objeto de análisis por parte del operador judicial al momento de proferir fallo de fondo.

Así las cosas, la Sala concluye que la excepción no está llamada a prosperar.

### **3.3. Otros asuntos.**

En el expediente se observa lo siguiente:

i) A través de Resolución No. 0562 del 17 de febrero de 2020, en aplicación del artículo 160 del CPACA se delegó como abogado principal a Uriel López Vaca y a Cristian Eduardo Orozco Posada y Franklin José López Solano, en calidad de abogados suplentes del Consejo Nacional Electoral. El abogado Charrys Pérez presenta la contestación de la demanda<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Fls 174.

ii) Los demandados Luis Fernando Giraldo Rodríguez y Eridis Ester Polo confieren poder especial, amplio y suficiente al abogado Jorge Alberto Vera Quintero Fls. 121-122, el cual será aceptado por reunir los requisitos del artículo 74 del C. G. P.

En mérito de lo expuesto, el Despacho 12 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

### RESUELVE

**PRIMERO:** **APLICAR** al proceso las disposiciones del Decreto Legislativo 806 de 2020 en la forma dispuesta en la parte motiva de este auto.

**SEGUNDO:** Tener por contestada oportunamente la demanda por parte del Consejo Nacional Electoral y los demandados Luis Fernando Giraldo Rodríguez y Eridis Ester Polo Manosalba.

**TERCERO:** **DECLARAR** no probadas las excepciones previas propuestas por los demandados, de conformidad con lo expuesto en este proveído.

**CUARTO:** Reconocer al abogado Uriel López Vaca, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.641.683 y T. P. 178.711 del C. S. J., como apoderado principal del Consejo Nacional Electoral, en los términos y para los efectos del poder delegado según Resolución 0562 de 2020, obrante a folio 174 del expediente.

**QUINTO:** Reconocer a los abogados Cristian Eduardo Orozco Posada, identificado con cédula de ciudadanía No. 84.063.339 y T. P. 316.746 del C. S. J. y Franklin José López Solano, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.122.816.532 y T. P. 289.413, como apoderados suplentes del Consejo Nacional Electoral, en los términos y para los efectos del mandato delegado, obrante a folio 174.

**SEXTO:** Reconocer al abogado Jorge Alberto Vera Quintero, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.880.161 y T.P. 74.712 del C. S. J., como apoderada de los señores Luis Fernando Giraldo Rodríguez y Eridis Ester Polo, en los términos y para los efectos del poder conferido a folios 121 -122.

**SEPTIMO:** **NOTIFICAR** la presente providencia en los términos previstos en el artículo 9 del Decreto legislativo 806 de 04 de junio de 2020.

Para efecto de notificaciones y/o comunicaciones, se tendrán en cuenta las direcciones electrónicas que obran en el expediente, así:  
parte demandante: [hectoralfa@hotmail.com](mailto:hectoralfa@hotmail.com)

Radicación: 76001-23-33-000-2019-01090-00  
Acción: Electoral  
Demandante: Héctor Fabio García García.  
Demandado: Luis Fernando Giraldo Rodríguez y otra.  
Pág. No. 8 de 8



parte demandada: Luis Fernando Giraldo y Eridis Ester Polo Manosalba,  
apoderado Jorge Alberto Vera Quintero [jorgeveraquintero@hotmail.com](mailto:jorgeveraquintero@hotmail.com)

Registraduría Nacional del Estado Civil:  
[notificacionjudicialval@registraduria.gov.co](mailto:notificacionjudicialval@registraduria.gov.co);

Consejo Nacional Electoral: [cnenotificaciones@cne.gov.co](mailto:cnenotificaciones@cne.gov.co).

la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado:  
[procesosnacionales@defensajuridica.gov.co](mailto:procesosnacionales@defensajuridica.gov.co).

Concejo Municipal de Cartago: [concejocartago2016@gmail.com](mailto:concejocartago2016@gmail.com)  
Ministerio Público: [procjudadm165@procuraduria.gov.co](mailto:procjudadm165@procuraduria.gov.co)

**OCTAVO** Ejecutoriada la presente providencia, ingrese el expediente al despacho para proveer lo pertinente.

  
**VÍCTOR ADOLFO HERNÁNDEZ DÍAZ**  
Magistrado

  
**ZORANNY CASTILLO OTÁLORA**  
Magistrada

  
**ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES**  
Magistrada